

**ASÍ MARCHAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS**

En Acción Democrática se está imponiendo la fórmula del Consenso para elegir al candidato presidencial. Según Cesar Gil, secretario sindical de ese partido, ese método puede salvar a la organización de una división segura producto de una confrontación electoral interna. El consenso consiste en una consulta a los organismos del partido, que finalmente se recoge y procesa en las instancias directivas nacionales. En otras palabras, el cogollo del partido decide quién es el candidato. Lo que parece claro es que en este contexto, candidaturas como de la Alfaro Uceró tienen todas las de ganar, mientras que opciones como Claudio Fermín no tienen nada que buscar.

Por otra parte, con ocasión del 56 aniversario de Acción Democrática, se confirmó una vez más el pacto entre este partido y el gobierno del Presidente Caldera. En efecto, el propio Dr. Caldera, en medio de la más alta dirigencia adeca, reconoció y agradeció el apoyo recibido en su gestión de gobierno.

En el MAS la división sigue en suspenso desde el 27 de abril pasado. Las dos tendencias encontradas de Víctor Hugo D'Paola y Leal Puchi anuncian cada una por su lado su voluntad de entendimiento y de unidad; sin embargo, también cada una por su parte está convocando una convención del partido naranja para octubre. Los dos líderes históricos del partido, Teodoro Petkoff y Pompeyo Márquez, abogan también por la unidad y por la necesidad de consolidar una opción partidista alternativa para el país.

En COPEI el tema de las candidaturas sigue generando polémicas y conflictos. Del 16 al 19 de septiembre está prevista la celebración de una nueva convención nacional del partido verde, en la cual se discutirá y aprobará la reforma estatutaria para la elección de candidatos a cargos políticos de elección popular. Este es el primer paso en un proceso interno que se prevé largo y difícil para este partido.

**EL PARO AGRÍCOLA Y EL II FORO IBEROAMERICANO DE AGRICULTURA**

En el caso venezolano, la llamada "crisis agrícola" ha tomado auge divulgativo en los medios de comunicación y, para un lector no involucrado en la materia, salvo como consumidor, el panorama resulta casi trágico. Los reclamos que se escuchan insistentemente, motorizados por algunos de los gremios cúpulas de la agricultura y la ganadería, son de tal diversidad y complejidad que su análisis pareciera indicar una situación de tal magnitud económica, anarquía organizativa y desesperación social, que se hace necesario e indispensable la formulación de medidas de extrema gravedad y urgencia sólo comparables a situaciones de desastre nacional o conflagración bélica. Las propuestas que se oyen tales como declaratoria de emergencia agrícola, ruptura de acuerdos internacionales y aprobación de leyes especiales de protección al agro configuran un cuadro que, de no ser visto en un contexto de seriedad y responsabilidad, van a acarrearle al país y a la población consumidora una verdadera crisis de abastecimiento y al propio sector agrícola una situación de

minusvalía creciente y de incapacidad permanente, de amoldarse a las nuevas circunstancias de la economía mundial.

No escapa a cualquier interesado en la materia, la clara existencia de proyectos personales y grupales de tipo político en toda esta agitación sectorial. Al lado de aspiraciones legítimas y justos reclamos por lineamientos de política que orienten al productor hacia nuevas formas de practicar su actividad, la cual les permita insertarse en las nuevas formas de producir y de comercializar nacional e internacionalmente, se han enquistado intereses y liderazgos no tan sacrificados, los cuales encuentran en la protesta una vía de fortalecimiento gremial que no sólo implica un camino hacia la consolidación institucional de los tradicionales gremios representativos del sector productor, sino el fortalecimiento de los mismos como estructuras económicas que, bajo la idea de ser los vehículos apropiados para la redención de los productores, obtienen buenos ingresos económicos que garantizan no sólo la supervivencia de los liderazgos actuales sino que apuntan a servir de plataformas electorales locales y estatales que se oferten como los defensores legítimos de la estructura agraria venezolana. Sólo es cuestión de esperar un corto espacio de tiempo para ver esta idea plasmada en realidad.

Buena parte de la protesta se orienta a agudizar el enfrentamiento entre los "pobres" productores y la "malvada" agroindustria, la cual, según los interesados nacionales o multinacionales, sólo busca incrementar sus beneficios a costa de la desaparición de la producción nacional. Bajo

esa línea de pensamiento, se presiona al gobierno para fijar precios que exceden en demasía el de la materia prima importada y luego se arma todo el mecanismo de presión para evitar que la realidad sincere el precio final que pagará la industria. Un caso como el de la leche nos indica que para 1982 el consumo per cápita era de 125 lts./año, y en 1997 llegará apenas a los 70 lts.; sin embargo, el volumen de la producción nacional actual permanece casi en los mismos niveles de 1982 y la importación es significativamente menor, es decir, que la caída del consumo es la única explicación del descenso del consumo y de las importaciones; sin embargo, se sigue insistiendo en la capacidad de autoabastecimiento nacional, con la consecuente elevación de los precios, lo cual aleja más al consumidor de ese vital producto.

Por el contrario poco o nada se oye a nivel de las "cúpulas" gremiales acerca de la espantosa situación de la infraestructura rural (vialidad, agua, electricidad, vivienda, riego, drenaje, etc.) y de la ausencia de servicios a la población (salud, educación, transporte, seguridad, etc.), lo cual sí debería plantearse como centro de las discusiones sobre cómo superar la situación agrícola del país y muy especialmente acerca de los servicios dirigidos a mejorar la producción, tales como investigación, asistencia técnica, redes de almacenamiento, sistemas de información, financiamiento y todo aquello dirigido al mejoramiento predial.

En conclusión, al observar las deliberaciones del II Foro Iberoamericano de Agricultura y revisar el documento final denominado "Declaración de

Maturín", pareciera repetirse la historia conocida de disponer de un arsenal de sanos propósitos, bien fundados planteamientos de modernidad y armonización de intereses dentro de la cadena agroalimentaria, los cuales son compartidos por todos los participantes de esa cadena; pero, por otro lado, a nivel menos retórico, se presiona en la aspiración de mantener los privilegios, ineficiencias y discrecionalidades oficiales y gremiales que son fuente del conflicto público que a todos nos inquieta día a día y que sólo logran esconder y disipar la incuestionable necesidad de ponernos a trabajar en una estrategia de corto y largo plazo, que nos puede hacer entrar al tercer milenio en mejores condiciones de producción, productividad y abastecimiento alimentario.

### PARO CÍVICO

El 6 de agosto pasado, la CTV convocó a un paro cívico nacional en protesta por los retardos del sector empresarial para ponerse al día con la nueva legislación laboral. Según los voceros de la CTV, la gran mayoría de las empresas del país no habían salarizado los bonos de transporte y alimentación, como tampoco habían recalculado las prestaciones laborales y, mucho menos, habían hecho las erogaciones correspondientes a los trabajadores.

Cuando el paro fue convocado, tanto el gobierno como el sector empresarial criticaron fuertemente la medida. Con el correr de los días, todos los sectores involucrados fueron dando su apoyo a la huelga. Con lo cual, el paro cívico se convirtió en el paro cívico. Los empresarios y el gobierno, a quienes iba dirigida la

medida de presión, coincidían en decir que la Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga de todos los trabajadores y que efectivamente había incumplimiento y retardos en la aplicación de la nueva legislación.

Por otra parte, la convocatoria expresa al paro cívico se hizo bajo un llamado equívoco. Se decía que la huelga pretendía llamar la atención tanto del sector empresarial como del gobierno sobre la necesidad de aumentar los sueldos y salarios que están en situación de franco deterioro real. Todo lo cual es cierto, pero puede significar dos cosas a la vez. En efecto, aumentar los sueldos y salarios significa salarizar los bonos que por decretos complementaban al salario mínimo existente. También puede significar que una vez que se ha hecho la puesta al día con la nueva legislación laboral y los ajustes correspondientes de salario mínimo y bonos compensatorios, el gobierno puede decretar un nuevo monto para el salario mínimo. ¿Para qué exactamente la CTV estaba convocando a un paro cívico?

Por la imprecisión de la convocatoria, así como por el cinismo con que la acogieron los empresarios y el gobierno, el día de la huelga nacional llegó con desconcierto, desconfianza e incertidumbre. Todos nos quedamos en casa, porque ninguna clase de transporte público funcionaba y no se hizo ningún tipo de movilización obrera en las calles. Al final de la jornada, el Secretario General de la CTV declaraba que se había producido una gran jornada democrática de protesta. Otros pensábamos que al menos nos quedó un día libre que no estaba programado.

### NIPLES

Durante el mes de septiembre han aparecido artefactos explosivos en diversos escombros de Caracas dirigidos a provocar pánico entre la población. La Disip sostiene que hay manos expertas en explosivos detrás de la confección y colocación de estas "bombas". En la opinión pública se habla del surgimiento de grupos políticos terroristas. Los cuerpos de seguridad del Estado dicen estar trabajando activamente para desactivar cualquier organización terrorista que se esté desarrollando en el país. Hay hipótesis encontradas y opiniones aventuradas, hay detenciones y allanamientos policiales, también hay quienes se adjudican la colocación de las bombas.

Esta es una ocasión propicia para que los cuerpos de seguridad del Estado demuestren rápidamente su eficacia y entierren cualquier conato de terrorismo en el país. Pero, una vez más, hay que decir que estas tareas suponen inteligencia y respeto a los derechos humanos. Sería lastimoso que, con el pretexto de desmantelar el terrorismo, se actúe irresponsablemente frente a grupos y personas.